

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

Auto interlocutorio No. \_

MAGISTRADO PONENTE: OSCAL SILVIO NARVÁEZ DAZA

ACCIÓN:	Ejecutiva
EXPEDIENTE:	76001-23-33-000-2021-00434-00
DEMANDANTE:	Alba Lucía Caicedo y otros. <a href="mailto:oficinatellez@gmail.com">oficinatellez@gmail.com</a> <a href="mailto:vimattezz@hotmail.com">vimattezz@hotmail.com</a>
DEMANDADO:	Nación – Fiscalía General de la Nación. <a href="mailto:pqrs@fiscalia.gov.co">pqrs@fiscalia.gov.co</a>
ASUNTO:	Medida cautelar

I. OBJETO DE LA DECISION

La parte ejecutante a través de apoderado judicial, presentó solicitud de medida cautelar<sup>1</sup>en los siguientes términos:

*“(…) 1.1.- Sírvase, señor Juez, decretar el embargo y secuestro preventivos de los siguientes bienes que denuncio como de propiedad del deudor, LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de las condiciones civiles ya anotadas: Las cuentas corrientes o de ahorro que pueda tener LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en los siguientes Bancos:*

*Banco de Bogotá - Banco Popular –  
Banco CorpBanca - Bancolombia –  
Scotiabank – Colpatria – Banco GNB Sudameris –  
BBVA Colombia – Banco de Occidente –  
Banco Caja Social – Davivienda –  
Banagrario – AV Villas –  
Bancamía S.A. – Banco W S.A. –  
Bancoomeva – Banco Falabella S.A. –  
Banco Pichincha S.A. – Banco Santander –  
Banco Mundo Mujer - Banco Multibank*

*1.2.- Que, como consecuencia de lo anterior, se condene a LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, al pago de costas y costos del proceso.  
(…).”*

*3. CUANTÍA Y COMPETENCIA 3.1.- Por el valor de la pretensión mayor, es decir, la pretensión PRIMERA del acápite de las pretensiones de la demanda, la cual estimo en una suma superior a los a los doscientos cincuenta y tres millones cincuenta y cinco mil setecientos diecinueve pesos (\$253.055.719). (…).”*

II. ANTECEDENTES

<sup>1</sup>[https://etbcsj.sharepoint.com/:b:/t/Secretaria2TRIBUNALADMINISTRATIVODELVALLE/EctfvNfruQNLnE\\_5L0o0wGsB16B5c2r5ENioiQSpAAupYw?e=5c1IXN](https://etbcsj.sharepoint.com/:b:/t/Secretaria2TRIBUNALADMINISTRATIVODELVALLE/EctfvNfruQNLnE_5L0o0wGsB16B5c2r5ENioiQSpAAupYw?e=5c1IXN).



**RADICACIÓN** : 2021-00434-00  
**MEDIO DE CONTROL** : Ejecutivo  
**EJECUTANTE** : Alba Lucía Caicedo y otros  
**EJECUTADO** : Nación – Fiscalía General de la Nación

2

La obligación a recaudar se sustenta en la sentencia del 21 de junio de 2018, proferida por la Sección Tercera Subsección “A” del Consejo de Estado<sup>2</sup>, en la cual resolvió:

*“(…) SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar por concepto de perjuicios morales a Alba Lucía Caicedo, Daniel Felipe Cerón Caicedo y Juan David Verón Caicedo la suma equivalente a setenta (70) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno; a la señora Virginia Caicedo Buen Día la suma equivalente a cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y, a la señora Luz Marina Caicedo, la suma equivalente a treinta (30) salarios legales mensuales vigentes.*

*TERCERO: CONDENAR a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar como indemnización por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y, a favor de la señora Alba Lucía Caicedo, suma de veinticuatro millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil diecisiete pesos (\$24.448.017).*

*CUARTO: CONDENAR a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar como indemnización por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante y a favor de la señora Alba Lucía Caicedo, suma de nueve millones ochocientos cincuenta y nueve mil novecientos cuarenta y dos pesos (\$9.859.942). (…).”*

### III. CONSIDERACIONES

#### 3.1. DEL TRÁMITE QUE SE DEBE IMPRIMIR AL PROCESO EJECUTIVO

En relación con el trámite que se debe adelantar para seguir la ejecución de títulos provenientes de condenas judiciales que imponen la obligación de pagar una suma de dinero, el artículo 298<sup>3</sup> de la Ley 1437 de 2011 modificado por el artículo **80 de la Ley 2080 de 2021** dispone que una vez vencido el término con que cuenta la administración para dar cumplimiento a las sentencias sin que la entidad haya cumplido con la condena impuesta, el juez competente, a solicitud del acreedor, **librará mandamiento ejecutivo** de acuerdo con las reglas previstas en el **Código General del Proceso (CGP)** para la ejecución de providencias.

Lo anterior, sin perjuicio de que la notificación del mandamiento ejecutivo a entidades públicas se surta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011 modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021.

<sup>2</sup>[https://etbcsj.sharepoint.com/:b:/t/Secretaria2TRIBUNALADMINISTRATIVODELVALLE/EYp\\_HhMtMA1Hnr8cE6H2C\\_MB\\_D\\_82Y837tFhYY9UJF592nA?e=qDZiWP](https://etbcsj.sharepoint.com/:b:/t/Secretaria2TRIBUNALADMINISTRATIVODELVALLE/EYp_HhMtMA1Hnr8cE6H2C_MB_D_82Y837tFhYY9UJF592nA?e=qDZiWP).

<sup>3</sup> “Artículo 298. Procedimiento. *Una vez transcurridos los términos previstos en el artículo 192<sup>3</sup> de este código, sin que se haya cumplido la condena impuesta por esta jurisdicción, el juez o magistrado competente, según el factor de conexidad, **librará mandamiento ejecutivo** según las reglas previstas en el Código General del Proceso para la ejecución de providencias, previa solicitud del acreedor.*

*Si el título lo constituye una conciliación aprobada por esta jurisdicción o un laudo arbitral en que hubiere sido parte una entidad pública, el mandamiento ejecutivo se librará, previa solicitud del acreedor, una vez transcurridos seis (6) meses desde la firmeza de la decisión o desde la fecha que en ella se señale, bajo las mismas condiciones y consecuencias establecidas para las sentencias como título ejecutivo. En este caso, se observarán las reglas establecidas en el Código General del Proceso para la ejecución de providencias judiciales.*

*Si la ejecución se inicia con título derivado de conciliación aprobada por esta jurisdicción, se aplicará el factor de competencia por conexidad. Si la base de ejecución es un laudo arbitral, operarán los criterios de competencia por cuantía y territorial, definidos en este código.*

**Parágrafo.** *Los defectos formales del título ejecutivo podrán declararse por el juez de oficio en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso”. (Negrillas fuera de texto)*



**RADICACIÓN** : 2021-00434-00  
**MEDIO DE CONTROL** : Ejecutivo  
**EJECUTANTE** : Alba Lucía Caicedo y otros  
**EJECUTADO** : Nación – Fiscalía General de la Nación

3

Lo anterior, ha sido posición reiterada del Consejo de Estado<sup>4</sup> al manifestar que el proceso ejecutivo está regulado integralmente por el CGP, y que por ello su desarrollo nace bajo el amparo de dicho estatuto, sobre este punto ha sostenido:

*“Los trámites que se surtan al interior de todo proceso de ejecución, incluyendo la presentación de excepciones<sup>5</sup>, realización de audiencias<sup>6</sup>, sustentaciones y trámite de recursos<sup>7</sup>, también se sujetarán a las previsiones y formalidades del Código General del Proceso, pues el proceso ejecutivo, se debe desarrollar con base en las disposiciones de éste último estatuto procesal y no del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dado que en la normatividad procesal administrativo, no existen normas o reglas especiales para este proceso especial de cobro ejecutivo.*  
(Subraya el despacho)

### 3.2. MEDIDA CAUTELAR:

La doctrina<sup>8</sup> en general, cree encontrar en las medidas cautelares un claro desarrollo del principio de igualdad o equilibrio procesal; con visión más restringida, sin embargo, hay quienes hablan de que tienen por objeto asegurar la ejecución del fallo correspondiente, y, otros, del ejercicio de un derecho de supremacía que corresponde al Estado. Estas opiniones están orientadas por un enfoque común; las medidas cautelares evitan los efectos nocivos del excesivo tiempo que se utiliza en las tramitaciones de los procesos, por cuanto, como lo explicó Redenti<sup>9</sup> *de poco servirían las decisiones judiciales “si entre tanto.... se han escapado los bueyes”*.

Para Carnelutti<sup>10</sup> su fin es evitar *“Aquellas alteraciones en el equilibrio inicial de las partes que puedan derivar de la duración del proceso”*. Opinión que sigue Fassi<sup>11</sup> al decir que *“todas las medidas cautelares se hallan supeditadas y encuentran justificación en la necesidad de mantener la igualdad de las partes en el juicio”*.

Respecto a las medidas cautelares en los procesos ejecutivos, el Código General del Proceso, establece que desde la presentación de la demanda el ejecutante podrá solicitar el embargo y secuestro de los bienes del ejecutado.

El artículo 593<sup>12</sup> del CGP regula los aspectos generales del embargo como medida cautelar, su procedencia en cada caso y el trámite a seguir en ese mismo capítulo.

<sup>4</sup> Consejo de Estado. i) Sección Segunda, Subsección B, radicado 680012333000 2016-01034 01 CP. Sandra Lisset Ibarra Vélez; ii) Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2017-02814-00 CP. Julio Roberto Piza Rodríguez, entre otras.

<sup>5</sup> Ver artículo 442 de la Ley 1564 de 2012.

<sup>6</sup> Ver artículos 372 y 373 C.G.P.

<sup>7</sup> Ver artículos 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329 y 330 del C.G.P.

<sup>8</sup> LÓPEZ BLANCO Hernán Fabio, “CODIGO GENERAL DEL PROCESO PARTE ESPECIAL”, Segunda Edición, Bogotá – 2018, pág. 751-753.

<sup>9</sup> REDENTI Enrico, Derecho Procesal Civil, t II, Buenos Aires, EJE, Pág. 243.

<sup>10</sup> CARNELUTTI Francesco, Derecho y Proceso, Buenos Aires, EJE, 1971, pág. 415

<sup>11</sup> FASSI Santiago, Código Procesal Civil y Comercial, Buenos Aires, Ed. Astrea, 1971, pág. 329.

<sup>12</sup> **Artículo 593:** (...) Para efectuar embargos se procederá así:

4. El de un crédito u otro derecho semejante se perfeccionará con la notificación al deudor mediante entrega del correspondiente oficio, en el que se le prevendrá que para hacer el pago deberá constituir certificado de depósito a órdenes del juzgado. Si el deudor se negare a firmar el recibo del oficio, lo hará por él cualquiera persona que presencie el hecho.

Al recibir el deudor la notificación deberá informar acerca de la existencia del crédito, de cuándo se hace exigible, de su valor, de cualquier embargo que con anterioridad se le hubiere comunicado y si se le notificó antes alguna cesión o si la aceptó, con indicación del nombre del cesionario y la fecha de aquella, so pena de responder por el correspondiente pago, de todo lo cual se le prevendrá en el oficio de embargo.



**RADICACIÓN** : 2021-00434-00  
**MEDIO DE CONTROL** : Ejecutivo  
**EJECUTANTE** : Alba Lucía Caicedo y otros  
**EJECUTADO** : Nación – Fiscalía General de la Nación

4

A su vez el artículo 599<sup>13</sup> del mismo CGP, establece lo pertinente a las medidas cautelares de embargo y secuestro particularmente en el proceso ejecutivo y también su respectivo procedimiento en el Capítulo II.

De los precitados dispositivos normativos se establece en el numeral décimo del primero de ellos que, en caso de embargos de sumas de dinero depositadas en establecimientos bancarios y similares, se comunicará a la correspondiente entidad como lo dispone el inciso primero del numeral 4<sup>14</sup>, debiéndose señalar la cuantía máxima de la medida, que no podrá exceder del valor del crédito y las costas más un cincuenta por ciento (50%) y que aquellos deberán constituir certificado del depósito y ponerlo a disposición del juez dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación; con la recepción del oficio queda consumado el embargo.

### 3.2.1 Embargabilidad de las cuentas de las entidades estatales – Reiteración jurisprudencial.

El artículo 63 de la Constitución Política consagra la inembargabilidad de ciertos bienes del Estado y faculta al legislador para que determine qué otros activos estatales tienen esa misma naturaleza, así:

*“Artículo 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.”*

En ejercicio de dicha potestad, el legislador ha establecido en distintos cuerpos normativos la inembargabilidad de los recursos contenidos en el Presupuesto General de la Nación o los que son girados a las entidades territoriales para inversión social mediante el Sistema General de Participaciones.

Estas disposiciones normativas e incluso algunas de igual contenido proferidas previo a la expedición de la Constitución de 1991, han sido objeto de control abstracto de

---

La notificación al deudor interrumpe el término para la prescripción del crédito, y si aquel no lo paga oportunamente, el juez designará secuestre quien podrá adelantar proceso judicial para tal efecto. Si fuere hallado el título del crédito, se entregará al secuestre; en caso contrario, se le expedirán las copias que solicite para que inicie el proceso...

10. El de sumas de dinero depositadas en establecimientos bancarios y similares, se comunicará a la correspondiente entidad como lo dispone el inciso primero del numeral 4, debiéndose señalar la cuantía máxima de la medida, que no podrá exceder del valor del crédito y las costas más un cincuenta por ciento (50%). Aquellos deberán constituir certificado del depósito y ponerlo a disposición del juez dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación; con la recepción del oficio queda consumado el embargo... (negritas fuera del texto).

<sup>13</sup> **Artículo 599. Embargo y secuestro.** El juez, al decretar los embargos y secuestros, podrá limitarlos a lo necesario; el valor de los bienes no podrá exceder del doble del crédito cobrado, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas, salvo que se trate de un solo bien o de bienes afectados por hipoteca o prenda que garanticen aquel crédito, o cuando la división disminuya su valor o su venalidad...

En los procesos ejecutivos, el ejecutado que proponga excepciones de mérito o el tercer afectado con la medida cautelar, podrán solicitarle al juez que ordene al ejecutante prestar caución hasta por el diez por ciento (10%) del valor actual de la ejecución para responder por los perjuicios que se causen con su práctica, so pena de levantamiento. La caución deberá prestarse dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del auto que la ordene. Contra la providencia anterior, no procede recurso de apelación. Para establecer el monto de la caución, el juez deberá tener en cuenta la clase de bienes sobre los que recae la medida cautelar practicada y la apariencia de buen derecho de las excepciones de mérito.

La caución a que se refiere el artículo anterior, no procede cuando el ejecutante sea una entidad financiera o vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia o una entidad de derecho público

<sup>14</sup> “El de un crédito u otro derecho semejante se perfeccionará con la notificación al deudor mediante entrega del correspondiente oficio, en el que se le prevendrá que para hacer el pago deberá constituir certificado de depósito a órdenes del juzgado. Si el deudor se negare a firmar el recibo del oficio, lo hará por él cualquiera persona que presencie el hecho”.



**RADICACIÓN** : 2021-00434-00  
**MEDIO DE CONTROL** : Ejecutivo  
**EJECUTANTE** : Alba Lucía Caicedo y otros  
**EJECUTADO** : Nación – Fiscalía General de la Nación

5

constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, Corporación que ha establecido que, aunque la regla general sea la inembargabilidad de dichos recursos, **hay eventos excepcionales en que se debe permitir su embargo**<sup>15</sup>.

El primero de esos pronunciamientos fue la sentencia C-546 de 1992, en la que se analizó la constitucionalidad de los artículos 8° parcial y 16 de la Ley 38 de 1989, y se estableció que las normas acusadas se ajustan a la Constitución bajo el entendido de que *“en aquellos casos en los cuales la efectividad del pago de las obligaciones dinerarias a cargo del Estado surgidas de las obligaciones laborales, solo se logre mediante el embargo de bienes y rentas incorporados al presupuesto de la nación, este será embargable en los términos del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo”*.

Posteriormente, en sentencia C-103 de 1994, la Corte declaró la constitucionalidad condicionada de unos apartes del artículo 1° del Decreto 2282 de 1989, *“por el cual se introducen algunas modificaciones al Código de Procedimiento Civil”*, en el entendido que *“cuando se trata de un acto administrativo definitivo que preste mérito ejecutivo, esto es, que reconozca una obligación expresa, clara y exigible, obligación que surja exclusivamente del mismo acto, será procedente la ejecución después de los diez y ocho (18) meses, con sujeción a las normas procesales correspondientes. Pero, expresamente, se aclara que la obligación debe resultar del título mismo, sin que sea posible completar el acto administrativo con interpretaciones legales que no surjan del mismo”*.

Luego, mediante sentencia C-354 de 1997, la Corte declaró la exequibilidad condicionada del artículo 19 del Decreto 111 de 1996, que consagra la inembargabilidad de las rentas incorporadas en el Presupuesto General de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman. En dicha providencia, la Corte señaló que *“los créditos a cargo del Estado, bien sea que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto –en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos– y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos”*.

Estos pronunciamientos fueron abordados de manera sistemática en la sentencia C-1154 de 2008, en la que, con ocasión de una demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 21 parcial del Decreto 28 de 2008, *“por medio del cual se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realice con recursos del Sistema General de Participaciones”*, se construyó la línea jurisprudencial de la embargabilidad de los recursos públicos y se estableció que, pese a que la regla general sea su carácter inembargable, hay situaciones en las que resulta plausible permitir el embargo. Además precisó que dentro de estas excepciones se encuentran aquellos recursos que tienen destinación específica para inversión social -como los del SGP-, cuando excepcionalmente no haya otras cuentas o recursos que resulten

---

<sup>15</sup> Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A, CP. María Adriana Marín, 14 de marzo de 2019, Radicación: 20001-23-31-004-2009-00065-01 (59802).





**RADICACIÓN** : 2021-00434-00  
**MEDIO DE CONTROL** : Ejecutivo  
**EJECUTANTE** : Alba Lucía Caicedo y otros  
**EJECUTADO** : Nación – Fiscalía General de la Nación

6

suficientes para garantizar el pago de las acreencias, en aras de garantizar el respeto de otros valores constitucionales como *“el reconocimiento de la dignidad humana, el principio de efectividad de los derechos, el principio de seguridad jurídica, el derecho a la propiedad, el acceso a la justicia y la necesidad de asegurar la vigencia de un orden justo, entre otros”*.

En ese mismo pronunciamiento, la Corte precisó que la excepción a la inembargabilidad de los recursos públicos es una respuesta a *“la necesidad de armonizar esa cláusula [la de inembargabilidad] con los demás principios y derechos reconocidos en la Constitución, [por lo que] la jurisprudencia ha fijado algunas reglas de excepción, pues no puede perderse de vista que el postulado de la prevalencia del interés general también comprende el deber de proteger y asegurar la efectividad de los derechos fundamentales de cada persona individualmente considerada”*.

Así las cosas, la excepción a la inembargabilidad de los recursos públicos se presenta cuando lo que se reclama tiene que ver con i) la necesidad de satisfacer créditos u obligaciones de origen laboral con miras a efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, ii) el pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias y iii) la ejecución de una obligación clara, expresa y exigible contenida en un título emanado del Estado. En este punto, debe precisarse que estas excepciones mantienen vigente:

*“...la regla general de la inembargabilidad de recursos del Presupuesto General de la Nación. Además, en el caso de la ejecución de sentencias y títulos ejecutivos emanados de la administración, la posibilidad de embargo exige que se haya agotado, sin éxito, el plazo previsto en el Código Contencioso Administrativo para el cumplimiento de las obligaciones del Estado”*.

A pesar de la existencia de un precedente judicial consolidado frente al reconocimiento de tres excepciones a la inembargabilidad de los recursos públicos, con la expedición de la Ley 1437 de 2011 se introdujo nuevamente en el ordenamiento jurídico una disposición rígida sobre el carácter inembargable de dichos recursos, así:

**“Artículo 195.** Trámite para el pago de condenas o conciliaciones. *El trámite de pago de condenas y conciliaciones se sujetará a las siguientes reglas:*

*(...)*

**Parágrafo 2o.** *El monto asignado para sentencias y conciliaciones no se puede trasladar a otros rubros, y en todo caso serán inembargables, así como los recursos del Fondo de Contingencias. La orden de embargo de estos recursos será falta disciplinaria.”*

Por su parte, el artículo 594 de la Ley 1564 de 2012, volvió a consagrar legalmente la inembargabilidad de los recursos incorporados en el presupuesto nacional, así:

**“Artículo 594.** Bienes inembargables. *Además de los bienes inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, no se podrán embargar:*

*1. Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social.*

*(...)*



**RADICACIÓN** : 2021-00434-00  
**MEDIO DE CONTROL** : Ejecutivo  
**EJECUTANTE** : Alba Lucía Caicedo y otros  
**EJECUTADO** : Nación – Fiscalía General de la Nación

7

*4. Los recursos municipales originados en transferencias de la Nación, salvo para el cobro de obligaciones derivadas de los contratos celebrados en desarrollo de las mismas”.*

Como puede verse, estas disposiciones son materialmente semejantes a los artículos 16 de la Ley 38 de 1989, 1° del Decreto 2282 de 1989 y 19 del Decreto 111 de 1996, que la Corte Constitucional declaró condicionalmente exequibles en las sentencias C-546 de 1992, C-103 de 1994 y C-354 de 1997, respectivamente, como se señaló arriba.

Por tratarse de disposiciones con un contenido normativo semejante al que ya fue analizado por la Corte Constitucional en las providencias que consolidaron el precedente que establece excepciones a la inembargabilidad de los recursos públicos, dicho criterio jurisprudencial se mantiene incólume y condiciona la interpretación constitucional adecuada de los nuevos preceptos legales, en el sentido de reconocer la regla general de inembargabilidad de los recursos públicos, pero aceptando que hay tres excepciones relativas a la ejecución de créditos de carácter laboral, o de obligaciones contenidas en sentencias o títulos ejecutivos emanados del Estado, las cuales permiten el embargo excepcional de dichos recursos, siempre que la obligación ejecutada se encuadre en alguna de ellas y que, en el caso de embargo de recursos que tienen destinación específica, se haya constatado que con el embargo de otros recursos de la entidad deudora no se logre cubrir la totalidad de la acreencia.

Esta postura también fue sostenida por el Consejo de Estado<sup>16</sup> en auto del 8 de mayo de 2014, en la que se señaló:

*“En síntesis, la regla general es la inembargabilidad de las rentas y recursos del Estado, salvo que se trate de créditos laborales, el pago de sentencias y demás obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles a cargo del Estado, para lo cual debe acudir al procedimiento señalado en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo o en los artículos 192, 194, 195 y 297 a 299 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según sea el caso.*

*Ahora bien, tratándose de recursos provenientes del SGP, éstos también son inembargables con la única excepción respecto de las obligaciones de naturaleza laboral.”.*

### **3.2. CASO CONCRETO:**

Atendiendo los lineamientos transcritos en precedencia, el despacho resalta que el presente proceso tiene por objeto la ejecución del pago de unos valores contenidos en la sentencia del 21 de junio de 2018, proferida por la Sección Tercera Subsección A del Consejo de Estado, dentro del proceso de reparación directa radicado con el número 76001-23-31-000-2002-00086-00, la cual quedó ejecutoriada el 16 de agosto de 2018<sup>17</sup>.

De tal suerte, en el asunto *sub examine* se configura una de las excepciones a la inembargabilidad de los recursos públicos establecida en la jurisprudencia constitucional, consistente en el cobro de una obligación clara, expresa y actualmente exigible contenida en una providencia judicial.

<sup>16</sup> Esta providencia fue proferida por la Sección Cuarta, dentro del proceso con radicado 19717, CP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

<sup>17</sup> Ver folio 23 archivo magnético “Prueba 4.1.1 \_sentencia de segunda instancia 21 de junio de 2018”.



**RADICACIÓN** : 2021-00434-00  
**MEDIO DE CONTROL** : Ejecutivo  
**EJECUTANTE** : Alba Lucía Caicedo y otros  
**EJECUTADO** : Nación – Fiscalía General de la Nación

8

Sin embargo, es del caso advertir que, en caso de duda acerca de los recursos depositados en las cuentas de las cuales se solicita el embargo, la entidad financiera debe dar aplicación al artículo 594<sup>18</sup> del CGP.

Lo anterior de conformidad con la providencia de abril 2 de 2019, Consejo de Estado – Sección Tercera– Subsección A<sup>19</sup>, en la que se recordó:

*“(…) Finalmente, es importante recordar que las entidades financieras deben cumplir con los deberes y responsabilidades de identificar la condición de inembargabilidad de los recursos públicos, desde el momento en que abren la respectiva cuenta corriente o ahorros, como lo indica la Circular Básica Jurídica 029 de 2014, tal como fue actualizada por la Circular 031 de 2016, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia<sup>20</sup>”.*

Así mismo, para mayor claridad de la orden de embargo, se resaltaré que no incluye las cuentas en las cuales se manejan recursos del Presupuesto General de la Nación y los límites anteriormente expuestos. En consecuencia, respecto de la solicitud presentada y de conformidad con lo establecido en el numeral 10 del artículo 593 del CGP<sup>21</sup>, se accederá a lo solicitado por la parte ejecutante limitando el embargo a la suma de *treientos setenta y nueve millones quinientos ochenta y tres mil quinientos setenta y ocho pesos (\$379.583.578)* teniendo en cuenta el valor de las sumas libradas en el mandamiento de pago, más un 50%.

Los establecimientos bancarios y financieros, deberán constituir certificado de depósitos y ponerlo a disposición de este despacho judicial, dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de esta comunicación, advirtiéndolo a las entidades financieras sobre las

<sup>18</sup> **Artículo 594.** Bienes inembargables. Además de los bienes inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, no se podrán embargar:

1. Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social.

(...)

**Parágrafo.** Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendrán de decretar órdenes de embargo sobre recursos inembargables. En el evento en que por ley fuere procedente decretar la medida no obstante su carácter de inembargable, deberán invocar en la orden de embargo el fundamento legal para su procedencia.

Recibida una orden de embargo que afecte recursos de naturaleza inembargable, en la cual no se indicare el fundamento legal para la procedencia de la excepción, el destinatario de la orden de embargo, se podrá abstener de cumplir la orden judicial o administrativa, dada la naturaleza de inembargable de los recursos. En tal evento, la entidad destinataria de la medida, deberá informar al día hábil siguiente a la autoridad que decretó la medida, sobre el hecho de no acatamiento de la medida por cuanto dichos recursos ostentan la calidad de inembargables. La autoridad que decretó la medida deberá pronunciarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de envío de la comunicación, acerca de si procede alguna excepción legal a la regla de inembargabilidad. Si pasados tres (3) días hábiles el destinatario no se recibe oficio alguno, se entenderá revocada la medida cautelar.

En el evento de que la autoridad judicial o administrativa insista en la medida de embargo, la entidad destinataria cumplirá la orden, pero congelando los recursos en una cuenta especial que devengue intereses en las mismas condiciones de la cuenta o producto de la cual se produce el débito por cuenta del embargo. En todo caso, las sumas retenidas solamente se pondrán a disposición del juzgado, cuando cobre ejecutoria la sentencia o la providencia que le ponga fin al proceso que así lo ordene.

<sup>19</sup> C.P: Marta Nubia Velásquez Rico, RAD. 68001-23-33-000-2018-00458-01)63506.

<sup>20</sup> “5.1.6. Procedimiento en caso de medidas cautelares decretadas sobre recursos inembargables: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 63 de la Constitución Política, 134 y 182 de la Ley 100 de 1993, 19 del Decreto Extraordinario 111 de 1996 (Estatuto Orgánico del Presupuesto), 91 de la Ley 715 de 2001, 8 del Decreto 050 de 2003, son inembargables los recursos de: el Sistema de Seguridad Social, las rentas incorporadas al Presupuesto General de la Nación así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman, el Sistema General de Participaciones -SGP-, Regalías y los demás recursos a los que la ley le otorgue la condición de inembargables. // En tal virtud, en los eventos en los cuales las entidades vigiladas reciban órdenes de embargo respecto de los recursos anteriormente mencionados, deben cumplir el procedimiento señalado en el parágrafo del artículo 594 del CGP

**“De otro lado, al momento de la celebración de cualquier contrato de depósito, corresponderá a las entidades solicitar la información que les permita identificar la condición de inembargabilidad de los respectivos recursos”** (la negrilla no es del texto).

<sup>21</sup> El de sumas de dinero depositadas en establecimientos bancarios y similares, se comunicará a la correspondiente entidad como lo dispone el inciso primero del numeral 4, debiéndose señalar la cuantía máxima de la medida, que no podrá exceder del valor del crédito y las costas más un cincuenta por ciento (50%). Aquellos deberán constituir certificado del depósito y ponerlo a disposición del juez dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación; con la recepción del oficio queda consumado el embargo.



**RADICACIÓN** : 2021-00434-00  
**MEDIO DE CONTROL** : Ejecutivo  
**EJECUTANTE** : Alba Lucía Caicedo y otros  
**EJECUTADO** : Nación – Fiscalía General de la Nación



9

excepciones para la viabilidad de la embargabilidad de los recursos, requiriéndoseles para que realicen la respectiva verificación de la procedencia de los dineros.

#### IV. DECISIÓN

Por los motivos expuestos, este Tribunal,

#### R E S U E L V E

**PRIMERO.- DECRETAR EL EMBARGO Y RETENCIÓN** de los dineros depositados en cuentas de ahorros y/o cuentas corrientes que se encuentren a nombre de la Nación – Fiscalía General de la Nación, en las entidades financieras Banco de Bogotá, Banco Popular, Banco CORPBANCA, BANCOLOMBIA, SCOTIABANK – COLPATRIA, Banco GNB Sudameris, BBVA Colombia, Banco de Occidente, Banco Caja Social, DAVIVIENDA, BANAGRARIO, AV VILLAS, BANCAMÍA S.A., Banco W S.A., BANCOOMEVA, Banco Falabella S. A., Banco Pichincha S. A., Banco Santander, Banco Mundo Mujer y Banco MULTIBANK, limitando el embargo hasta la suma de *trescientos setenta y nueve millones quinientos ochenta y tres mil quinientos setenta y ocho pesos* (\$379.583.578).

A través de la Secretaría de esta Corporación, se libraré el oficio correspondiente dirigido al pagador o tesorero de dicha entidad, previniéndolo que la orden de embargo no incluye las cuentas en las cuales se manejan recursos del Presupuesto General de la Nación y se verifique por el funcionario responsable que los dineros afectados por el embargo no tengan naturaleza de inembargabilidad caso en el cual *deberá verificarse si se atempera a las excepciones previstas en la ley y la jurisprudencia*; así mismo, deberá constituir certificado de depósitos, ponerlo a disposición de este Despacho e indicar las prevenciones contenidas en el numeral 4º del artículo 593 del CGP, so pena de dar aplicación a la sanción contemplada en el párrafo 2º del artículo precitado de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO. - DESE** cumplimiento inmediato a esta medida, conforme lo dispone el artículo 298 del CGP.

#### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

**OSCAL SILVIO NARVAEZ DAZA**  
**Magistrado**  
(Firma Electrónica SAMAI).

**RADICACIÓN** : 2021-00434-00  
**MEDIO DE CONTROL** : Ejecutivo  
**EJECUTANTE** : Alba Lucía Caicedo y otros  
**EJECUTADO** : Nación – Fiscalía General de la Nación

